

EL MONOPOLIO ESTATAL DE LA ENSEÑANZA

punto negro
de la Democracia
Argentina

Uno de los aspectos más contradictorios con los principios democráticos, que aparecen en el actual panorama de nuestra Nación es la persistencia del Monopolio Estatal de la enseñanza. Herencia ésta de gobiernos que carecían de un auténtico concepto de la democracia, ha sido mantenida, desgraciadamente, por aquellos partidos políticos que, por otra parte, la proclaman en principio, y condenan el totalitarismo. Pero más lamentable es todavía que, después del esfuerzo realizado por la Nación para liberarse de un régimen, cada vez más estatista, se haya conservado este resabio antidemocrático, uno de los más claramente antidemocráticos que pueden existir en un país: libertad de prensa y libertad de enseñanza son dos ejes indispensables de la libertad ciudadana y en el grado en que se los cohibe, se está atentando contra los derechos más sagrados de un pueblo.

Es, por lo demás, evidente que el monopolio estatal de la enseñanza, así esté centralizado en el reconocimiento exclusivo de las instituciones oficiales del Estado para enseñar, con la consiguiente regularización también "oficial" de los programas y de la ideología que debe informar la escuela, es directamente contrario a la esencia misma de la libertad de enseñanza.

No sólo como católicos, sino también como ciudadanos libres, que tenemos conciencia de nuestra responsabilidad individual y social, consideramos una continua ofensa a nuestros derechos más sagrados la persistencia del monopolio estatal de la enseñanza. Es una restricción indebida que necesariamente impone a toda la enseñanza nacional una dirección única que no podemos en manera alguna admitir.

Si, como ciudadanos, creemos que nuestra conciencia individual y social está violada por el monopolio del Estado, debemos también señalar que éste es una ofensa directa para los derechos inalienables de la familia.

Con el monopolio estatal el Estado no sólo se introduce totalitariamente en la libertad individual y fuerza, en cierto grado, la conciencia ciudadana, sino que además atropella el derecho de los padres de familia, que la misma naturaleza les ha concedido, para dar a sus hijos aquella educación que ellos crean más conveniente.

Con el monopolio estatal el Estado, se arroga prácticamente la función de padre y madre de todos los ciudadanos menores de edad, reincidiendo otra vez al postulado totalitario de que los hijos son del Estado antes que de los padres. La mitigación del monopolio por la posible intervención de los consejos de los padres de familia en la escuela no suprime su falla esencial, ya que la escuela "oficial" puede también dirigir la formación de los consejos de padres de familia con una selección "oficial", y, en todo caso, obliga a los padres a entrar dentro de un molde determinado de escuela que tal vez a ellos no les satisface plenamente y que sólo admiten como un mal menor.

El monopolio es también una rémora de la cultura nacional, y, por eso, en nombre de la cultura y de la ciencia, en nombre de la necesidad misma que el país tiene de intensificar su progreso técnico y científico y de elevar su espíritu cultural, denunciemos la continuación de este sistema de educación pública tan pertinazmente invocado por ciertos partidos liberales y de izquierda y lamentablemente, mantenido por los gobiernos argentinos hasta el presente.

Si como ciudadanos y deseosos de un mayor progreso cultural de la Patria debemos mantener nuestra firme protesta ante el monopolio estatal de la enseñanza, como católicos tenemos también la obligación de subrayarla. El monopolio implica una dirección oficial que puede o no estar de acuerdo con los principios católicos. En el primer caso reclamaremos todavía para los no católicos el derecho de que puedan ellos tener sus escuelas con aquella orientación que los padres de los alumnos no católicos deseen. En el segundo caso lamentaremos los católicos, y nunca dejaremos de hacerlo, que las escuelas del Estado no impartan una enseñanza de acuerdo a la religión de los alumnos y a la voluntad de los padres.

Y subrayamos una vez más que la escuela oficial neutra, y mucho más si es única, no puede satisfacer con su neutralidad —casi nunca respetada— a los padres de familia católicos. Porque para los católicos no puede haber más solución justa que la escuela católica y el ambiente católico de la escuela. Y este derecho es irrenunciable para todo aquél que tenga un elemental conocimiento de lo que es la religión católica.

La escuela neutra o laica y única, resulta para los católicos argentinos agudamente ofensiva, precisamente porque la inmensa mayoría de la población sigue siendo católica y sigue deseando educar a sus hijos en escuelas católicas, y hace por ello todos los sacrificios posibles (incluso por parte de las familias modestas), para enviar a sus hijos a las escuelas privadas católicas, y sólo cuando ya no tiene otra solución se ha de resignar a que su derecho sea violado y envía a sus hijos a la escuela oficial laica.

Es necesario recordar que, en todo tiempo, incluso durante el anterior régimen, la Iglesia y los católicos han recordado y reclamado el principio de la libertad de enseñanza.

Pero es lógico que, una vez llegada la Revolución Libertadora, los católicos hayan pensado, más que nunca, en recuperar también esta plena libertad de enseñanza. La realidad es que en este punto la Revolución Libertadora ha decepcionado a los católicos argentinos. Y que la vuelta a la enseñanza laica en las escuelas del Estado, la entrega de la dirección de la enseñanza secundaria y más todavía casi en su totalidad de las Universidades Nacionales en manos de autoridades no sólo neutras, sino positivamente liberales y anticatólicas, y, sobre todo, el mantenimiento del monopolio estatal de la enseñanza, y la meditada dilación de la reglamentación del Art. 28 del decreto-ley sobre la Universidad, que autoriza la creación de las universidades privadas, constituirán un punto negro para los católicos, en el régimen de la Revolución Libertadora.

Una larga experiencia de nuestra historia nacional ha ido mostrando que una pequeña minoría gobernante o que controla ciertas esferas del gobierno ha estado imponiendo a nuestro país católico un régimen de enseñanza que, en manera alguna, puede satisfacer a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Esta larga experiencia muestra a los católicos que es poco e inestable lo que puedan esperar por medio de resoluciones gubernamentales. De aquí la necesidad de que su acción en la vida pública sea mucho más consciente y despierta, y, sobre todo, mucho más lógica con sus propias convicciones personales. Hay por desgracia una escisión en la mayoría de los católicos argentinos entre el ciudadano, el padre de familia y el miembro de un partido político. Como ciudadano es independiente; como padre de familia envía a su hijo haciendo todos los sacrificios posibles a una escuela católica y quiere para sus hijos la educación católica; como miembro del partido, votará, tal vez, a los que tienen en su plataforma la escuela laica o el divorcio, con la conciencia muy tranquila, sin darse cuenta de que está votando contra sí mismo como católico y como padre de familia.

Una plena conciencia por parte de los católicos en su actuación como ciudadanos será la que contribuya a borrar de la democracia argentina este punto negro.